

EL RECUADRO

La aritmética parlamentaria surgida tras las elecciones del pasado mes de julio ha planteado una complejísima situación en la que la conformación de mayorías y la consecuente constitución de un gobierno se están discutiendo y negociando en términos territoriales, judiciales e incluso constitucionales.

En ese escenario político lleno de incertidumbres, la economía, sin haber superado completamente las crisis sucesivas provocadas por la pandemia y por los graves efectos del escenario bélico en Ucrania, ofrece perspectivas preocupantes derivadas de la situación global y agravadas por la situación política española que la gran mayoría de los empresarios considera un riesgo añadido para el desarrollo de su actividad.

Todo ello genera una inestabilidad y una provisionalidad que están paralizando la toma de decisiones, desincentivan la inversión y el consumo, y están frenando reformas clave para que las empresas puedan desarrollar su actividad, crear riqueza y generar empleo.

El debate político no solo obvia la política económica sino que olvida que algunos de las cuestiones en negociación aumentan la inestabilidad social y territorial y generan mayor incertidumbre en los mercados financieros y de bienes y servicios, no ayudando en nada a mantener la confianza para que España siga siendo atractiva para la inversión productiva.

Quizás valga la pena recordar que España sigue demandando de su clase política responsabilidad y generosidad para poner los intereses generales por delante de los personales y partidistas, y aportar ideas y esfuerzo para alcanzar pactos sobre los que impulsar la estabilidad que necesitan las empresas para crear empleo y riqueza y cimentar el bienestar general.

El debate político actual no debería olvidar que seguimos necesitando inversión en infraestructuras productivas, estímulos a la demanda de bienes industriales, e instrumentos y medidas para mejorar la financiación de las empresas y reducir la morosidad.

Que apoyar la internacionalización de las empresas y trabajar por la simplificación administrativa y la unidad de mercado es lo realmente importante y urgente, y que combatir el fraude fiscal, coordinar las políticas tributarias estatales, autonómicas y locales, y reducir impuestos debería ser prioritario.

La política debería acercarse a la realidad del mundo laboral para impulsar realmente el empleo, reduciendo las cotizaciones sociales empresariales y modernizando el sistema de negociación colectiva de manera que sea un instrumento eficaz para impulsar la actividad, crear empleo y mejorar las condiciones de trabajo.

El debate político debería ocuparse de conseguir un suministro de energía competitivo y seguro, de definir un mix de generación equilibrado, realista y sin maximalismos ideológicos, que tenga como objetivo de impulsar la productividad y la competitividad de nuestra economía, aprovechando sus fortalezas actuales y reforzando sus potencialidades.

La negociación política debería centrarse en cómo apoyar el sistema español de innovación y orientarlo más al mercado, en mejorar su financiación y el marco normativo. En el impulso a proyectos económicos que favorezcan la digitalización, la transición ecológica, la eficiencia energética, y la internacionalización, y que sirvan para mejorar la productividad y la competitividad de las empresas, y en el refuerzo de la formación y la cualificación sobre las que todo ello debe sustentarse.

Nada de todo esto se contempla ni se discute, como si el gobierno que pueda salir de este proceso de negociación no tuviera otro objetivo que su propia constitución, más allá del respeto a la Ley y a los procedimientos democráticos, y sin que la realidad social y económica de familias y empresas parezcan merecer un marco político y jurídico previsible y libre de incertidumbres para poder desarrollarse.